



A LA MESA DEL CONGRESO

El diputado del **BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)**, Néstor Rego Candamil, adscrito al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, formula las siguientes **preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita sobre la valoración del Gobierno sobre la alteración intencionada de la composición de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia afectando al derecho al juez predeterminado por la ley.**

Recientemente se ha modificado la composición de las secciones tercera y cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Así, con fecha 12 de marzo, según trascendió públicamente, la Presidencia emitió una resolución sobre los cambios referidos bajo el argumento del deber de salvaguardar la apariencia y la realidad de la imparcialidad con que funciona la Sala, después de que se cuestionara la intervención del Magistrado Villares Naveira en varios procesos tramitados. Asimismo, se ha conocido, gracias a un comunicado de la organización «Jueces y Juezas para la Democracia», que, en otra resolución de la Presidencia, se acordaron los traslados de los magistrados/as con carácter forzoso.

Después de estas resoluciones, se inició la comunicación, por parte de la Presidencia de la sección tercera, a las partes en distintos procedimientos ordinarios relativos a impugnaciones de autorizaciones de parques eólicos, sobre los cambios en la composición de la sección y de los magistrados/as relatores/as, pero sin hacer mención alguna a las motivaciones ni a las citadas resoluciones.

Resulta evidente y muy preocupante la maniobra consumada que atenta directamente contra



el derecho al juez predeterminado por la ley, así como contra la garantía de la defensa de los intereses colectivos que representan las entidades que son parte en muchos de los procedimientos en curso.

Es sobradamente conocido que en los últimos años se han producido numerosas impugnaciones de autorizaciones administrativas previas y de construcción de parques eólicos en Galicia. Muchas de esas impugnaciones fueron tramitadas ante la sección tercera, cuyo criterio interpretativo llevó a la suspensión cautelar de algunas de las autorizaciones impugnadas, decisiones que fueron criticadas y cuestionadas por representantes del Gobierno gallego y por los propios promotores. Sin embargo, a pesar del cuestionamiento, debe recordarse que las decisiones de la sección fueron impugnadas ante el TS, que no tuvo más opción que inadmitir a trámite los recursos.

En todo caso, la polémica o controversia pública derivada de la dialéctica entre los promotores que defienden sus intereses económicos y las entidades, personas o asociaciones que reclaman en defensa de la protección ambiental y del cumplimiento de la legalidad, no puede servir de excusa, bajo ninguna circunstancia, para interferir en el derecho al juez predeterminado por la Ley.

Así, aunque la decisión de traslado de los jueces de la sección tercera está amparada por la letra de la LOPJ, no es menos cierto que interfiere en el citado derecho a un juez predeterminado por la ley y que implicará, en la práctica, un cambio radical en la composición de la sección y, por tanto, puede cambiar el sentido de las decisiones, cambio que, ahora sí, afectará directamente a la apariencia de imparcialidad del órgano.

Sería preciso dar a conocer, por ejemplo, al menos a las partes en los procesos afectados por la decisión, si los traslados contaban con la anuencia de los magistrados, pues, en caso



contrario, se estaría vulnerando la doctrina establecida en esta materia por el TEDH en relación con el artículo 19 del TUE.

Además, cabe destacar que, recientemente, la Sección Segunda conoció de una solicitud de suspensión cautelar de la autorización administrativa previa para la construcción de una línea de alta tensión, cuando, aplicando las normas de reparto preestablecidas, directamente vinculadas al derecho a un juez predeterminado por la ley, debería corresponder a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Atendiendo a las sobradamente constatadas irregularidades citadas, distintas entidades afectadas por las decisiones que vienen a vulnerar sus derechos fundamentales de tutela judicial efectiva, solicitaron ante la Presidencia del TSJ de Galicia así como ante el CGPJ, que actúen para garantizar el juez predeterminado por la ley, advirtiendo que se reservan el derecho de presentar todas las acciones que consideren oportunas en defensa del respeto a sus derechos fundamentales.

Sin embargo, cabe recordar que la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su Artículo Primero, establece que el MF tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los ciudadanos y del interés público, así como velar por la independencia de los Tribunales. En desarrollo de este artículo 1, el artículo tercero de la misma norma contempla que corresponde al Ministerio Fiscal velar porque la función jurisdiccional sea ejercida eficazmente según las leyes, debiendo ejercitar para ello las acciones, recursos y actuaciones pertinentes; ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales; y velar por el respeto a las instituciones constitucionales y a los derechos fundamentales y libertades públicas, como es el caso del artículo 24 CE y del derecho a un juez predeterminado por la ley.



Asimismo, el artículo octavo establece que el Gobierno del Estado podrá interesar a la Fiscalía General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes para defender el interés público.

Por los motivos expuestos, el BNG formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno:

1. ¿Ha tenido conocimiento el Gobierno de las citadas decisiones de la Presidencia del TSJ de Galicia que implicaron la alteración de la composición de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y el traslado forzoso de dos personas magistradas?
2. ¿Qué valoración hace el Gobierno de las prácticas que, en vulneración del derecho a un juez predeterminado por la ley, facilitan la alteración de la composición de la sección que venía conociendo de los recursos contra autorizaciones administrativas para la instalación de parques eólicos y otras infraestructuras complementarias para la evacuación de energía en Galicia?
3. ¿Comparte que es preciso garantizar el cumplimiento escrupuloso del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez predeterminado por la ley?
4. ¿Ha establecido algún canal de comunicación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial para interesarse por esta cuestión? ¿De ser así, cuál ha sido el resultado?
5. ¿Se ha interesado el Gobierno ante la Fiscalía General del Estado por la actuación en esta cuestión y/o sabe si va a realizar alguna actuación en relación con esta cuestión, atendiendo a las competencias que le atribuye el artículo 1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que encomienda la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los Tribunales?

En Madrid, a 22 de abril de 2026

Néstor Rego Candamil

Diputado del BNG en el Congreso



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL
REGISTRO GENERAL

22 ABR. 2026 12:10:59

Entrada **111880**

Sobre a alteración da Sección 3ª da Sala do C-A do TSX de Galiza e o Dº ao xuíz predeterminado

Competencia	Otros Expedientes
Tipo Expediente	300-Escrito en lengua española distinta del castellano, oficial en Comunidad Autónoma (art. 92.1)

Fdo.: Néstor REGO CANDAMIL
Diputado



Á MESA DO CONGRESO

O deputado do **BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)**, Néstor Rego Candamil, adscrito ao GRUPO PARLAMENTAR MIXTO, ao abeiro do establecido no artigo 185 e seguintes do Regulamento do Congreso, formula as seguintes **preguntas dirixidas ao Goberno para a súa resposta escrita sobre a valoración do Goberno sobre a alteración intencionada da composición da Sección Terceira da Sala do Contencioso Adminitrativo do TSX da Galiza afectando ao dereito ao xuíz predeterminado pola lei.**

Recentemente foi modificada a composición das seccións terceira e cuarta da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza da Galiza. Así, con data de 12 de marzo, segundo transcendeu publicamente, a Presidencia emitiu resolución sobre os cambios referidos baixo o argumento do deber de salvagardar a aparencia e a realidade da imparcialidade con que funciona a Sala, despois de terse cuestionado a intervención do Maxistrado Villares Naveira en varios procesos tramitados. Así mesmo, foi coñecido, grazas a un comunicado da organización “Xuíces e Xuizas para a Democracia” que, noutra resolución da Presidencia, acordáronse os traslados dos maxistrados/as con carácter forzoso.

Despois destas resolucións, iniciouse a comunicación, por parte da Presidencia da sección terceira, ás partes en distintos procedementos ordinarios relativos a impugnacións de autorizacións de parques eólicos, os cambios de composición da sección e dos maxistrados/as relatores/as, mais sen facer mención algunha ás motivacións e ás citadas resolucións.

Resulta evidente e moi preocupante a manobra consumada e que atenta directamente ao dereito ao xuíz predeterminado pola lei, así como garantía da

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL
REGISTRO GENERAL

22 ABR. 2026 12:10:59

Entrada **111880**



defensa dos intereses colectivos que as entidades partes en moitos dos procedementos en curso representan.

É sobradamente coñecido que nos últimos anos producíronse numerosas impugnacións de autorizacións administrativas previas e de construción de parques eólicos na Galiza. Moitas desas impugnacións foron tramitadas ante sección terceira, cuxo criterio interpretativo levou á suspensión cautelar dalgunhas das autorizacións impugnadas, decisións que foron criticadas e cuestionadas por parte de representantes do Goberno galego e polos propios promotores. Porén, a pesar do cuestionamento, debe lembrarse decisións da sección foron impugnadas ante o TS que non tivo máis opción que inadmitir a trámite os recursos.

En todo caso, a polémica ou controversia pública derivada da dialéctica entre os promotores que defenden os seus intereses económicos e as entidades, persoas ou asociacións que reclaman en defensa da protección ambiental e do cumprimento da legalidade, non pode servir de excusa, baixo ningunha circunstancia, para interferir no dereito ao xuíz predeterminado pola Lei.

Así, aínda que a decisión de traslado dos xuíces da sección terceira está amparada na letra da LOPX, non é menos certo que interfere no citado dereito a un xuíz predeterminado pola lei e que implicará, na práctica, un cambio radical na composición da sección e, por tanto, pode cambiar o sentido das decisións, mudanza que, agora si, afectará directamente a aparencia de imparcialidade do órgano.

Sería preciso dar a coñecer, por exemplo, cando menos ás partes nos procesos afectados pola decisión, se os traslados contaban coa anuencia dos maxistrados pois, en caso contrario, estaría a vulnerarse a doutrina establecida nesta materia polo TEDH en relación co artigo 19 do TUE.

Ademais, é de destacar que, recentemente a sección segunda veu coñecer dunha solicitude de suspensión cautelar de autorización administrativa previa para a construción dunha liña de alta tensión, cando aplicando as normas de reparto preestabelecidas, directamente vinculadas ao dereito a un xuíz predeterminado



pola lei, debera corresponder á Sección Terceira da Sala do Contencioso Administrativo.

Atendendo ás máis que constatadas irregularidades citadas, distintas entidades afectadas polas decisións que veñen a vulnerar os seus dereitos fundamentais de tutela xudicial efectiva, solicitaron ante a Presidencia do TSX da Galiza así como ante o CXPX, que actúen para garantir o xuíz predeterminado pola lei, advertindo que se reservan o dereito de presentar todas as accións que consideren oportunas en defensa do respecto dos seus dereitos fundamentais.

Porén, cabe lembrar que a Lei 50/1981, de 30 de decembro, pola que se regula o Estatuto Orgánico do Ministerio Fiscal, no seu Artigo Primeiro, establece que o MF ten por misión promover a acción da xustiza en defensa da legalidade, dos dereitos dos cidadáns e do interese público tutelado pola Lei, de oficio ou a petición dos cidadáns e do interese público, así como velar pola independencia dos Tribunais. En desenvolvemento deste artigo 1, o Artigo terceiro da mesma norma contempla que corresponde ao Ministerio Fiscal velar por que a función xurisdiccional sexa exercida eficazmente segundo as leis, debendo exercitar para iso as accións, recursos e actuacións pertinentes; exercer cantas funcións lles atribúa a lei en defensa da independencia dos xuíces e tribunais; e velar polo respecto das institucións constitucionais e dos dereitos fundamentais e liberdades públicas, como é o caso do artigo 24 CE e do dereito a un xuíz predeterminado pola lei.

Así mesmo, o Artigo oitavo fixa que o Goberno do Estado poderá interesar da Fiscalía Xeral do Estado promover ante os Tribunais as actuacións pertinentes para defender o interese público.

Polos motivos expostos, o BNG formula as seguintes preguntas dirixidas ao Goberno:

1. Tivo coñecemento o Goberno das citadas decisións da Presidencia do TSX da Galiza que implicaron a alteración da composición da Sección Terceira da Sala do Contencioso Administrativo e o traslado forzoso de dúas persoas maxistradas?



2. Que valoración realiza o Goberno de prácticas que, en vulneración do dereito a un xuíz predeterminado pola lei, facilitan a alteración da composición da sección que viña coñecendo dos recursos ante autorizacións administrativas para a instalación de parques eólicos e outras infraestruturas complementarias para a evacuación de enerxía na Galiza?
3. Comparte que é preciso garantir o cumprimento escrupuloso do dereito á tutela xudicial efectiva e a un xuíz predeterminado pola lei?
4. Estabeleceu algunha canle de comunicación entre o Executivo e o Poder Xudicial para interesarse por esta cuestión? De ser así cal foi o resultado?
5. Interesou o Goberno ante a Fiscalía Xeral do Estado a actuación nesta cuestión e/ou coñece se vai realizar algunha actuación en relación a esta cuestión atendendo ás competencias que lle atribúe o artigo 1 da Lei 50/1981, de 30 de decembro, pola que se regula o Estatuto Orgánico do Ministerio Fiscal, que encomenda a misión de promover a acción da xustiza en defensa da legalidade, dos dereitos das e dos cidadáns e do interese público tutelado pola lei, así como velar pola independencia dos Tribunais?

Madrid, a 22 de abril de 2026

Néstor Rego Candamil

Deputado do BNG no Congreso